

No. 38333

**Spain
and
Peru**

Treaty on judicial assistance in criminal matters between the Kingdom of Spain and the Republic of Peru. Madrid, 8 November 2000

Entry into force: *12 December 2001 by notification, in accordance with article XXVI*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Spain, 1 April 2002*

**Espagne
et
Pérou**

Traité d'assistance judiciaire en matière pénale entre le Royaume d'Espagne et la République du Pérou. Madrid, 8 novembre 2000

Entrée en vigueur : *12 décembre 2001 par notification, conformément à l'article XXVI*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Espagne, 1er avril 2002*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL
EN MATERIA PENAL ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y
LA REPÚBLICA DEL PERÚ**

El Reino de España y la República del Perú, deseosos de mejorar la asistencia judicial mutua en materia penal y de cooperar más eficazmente en la investigación y persecución de los delitos, incluyendo su juzgamiento y sanción, han acordado lo siguiente:

**TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO I
OBLIGACIÓN DE BRINDAR ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA**

- 1.- Las Partes Contratantes deberán, de conformidad con el presente Tratado, brindarse mutuamente la más amplia asistencia judicial en materia penal.
- 2.- Por asistencia judicial mutua se entiende toda ayuda concedida por el Estado requerido con respecto a las investigaciones o procedimientos en materia penal que se lleven a cabo en el Estado requirente.
- 3.- Por materia penal se entiende, investigaciones o procedimientos relacionados a cualquier delito comprendido en la ley penal.
- 4.- Los asuntos penales incluyen investigaciones o procedimientos relacionados con las infracciones penales a una ley de naturaleza fiscal, arancelaria o aduanera.

- 5.- La asistencia judicial abarcará particularmente:
- a. localización e identificación de personas, de domicilio y otros elementos materiales;
 - b. acopio de pruebas y obtención de declaraciones;
 - c. la autorización de la presencia de personas del Estado requirente en la ejecución de peticiones;
 - d. suministro de documentos incluidos documentos bancarios, expedientes y otros elementos de prueba;
 - e. suministro de información;
 - f. entrega de bienes, incluyendo la entrega temporal de objetos de prueba;
 - g. medidas cautelares sobre bienes;
 - h. la toma de medidas para localizar, inmovilizar y confiscar las ganancias del delito;
 - i. notificación de documentos;
 - j. la facilitación de la comparecencia de testigos o la ayuda de personas en las investigaciones;
 - k. poner las personas detenidas a disposición para que den testimonio o colaboren con las investigaciones; y
 - l. la provisión de otra asistencia compatible con los objetivos del presente Tratado.

**ARTICULO II
DERECHO APLICABLE**

- 1.- Las peticiones de asistencia deberán ejecutarse oportunamente de conformidad con la ley del Estado requerido y, en tanto no esté prohibido por dicha ley, en la manera especificada por el Estado requirente.
- 2.- El requerido deberá, previa solicitud, informar al Estado requirente acerca de la fecha y lugar de ejecución de la petición de asistencia.
- 3.- El Estado requerido no deberá rehusarse a ejecutar una petición basándose en el secreto bancario.

**ARTICULO III
MOTIVOS PARA DENEGAR O DIFERIR LA ASISTENCIA JUDICIAL**

- 1.- La asistencia judicial podrá ser denegada:
 - a. si el Estado requerido estima que la ejecución de la petición pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses fundamentales de su país;
 - b. si la petición se refiere a delitos considerados por el Estado requerido como delitos políticos o exclusivamente militares. No se considerará delito político el delito de terrorismo.
- 2.- El Estado requerido puede diferir la prestación de la asistencia judicial si la ejecución de la petición tuviera el efecto de interferir un proceso penal en curso en dicho país en cualquiera de sus etapas, investigación o juzgamiento.
- 3.- El Estado requerido:
 - a. deberá informar oportunamente al Estado requirente de la decisión del Estado requerido de que no cumplirá en todo o en parte una petición de asistencia, o pospondrá la ejecución y deberá exponer las razones de dicha decisión;

- b. antes de denegar o de diferir la asistencia judicial evaluará si ésta puede ser prestada bajo las condiciones que juzgue necesarias. En tal caso, dichas condiciones, de ser aceptadas, deberán ser respetadas en el Estado requirente.

TÍTULO II OBTENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA

ARTÍCULO IV UTILIZACIÓN RESTRINGIDA

El Estado requirente no deberá divulgar o usar la información o las pruebas proporcionadas, para otros fines que no sean aquellos establecidos en la petición, sin consentimiento previo de la Autoridad Competente del Estado requerido.

ARTÍCULO V LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS

Las autoridades competentes del Estado requerido deberán desplegar sus mejores esfuerzos para averiguar la ubicación e identificación de personas y objetos especificados en la petición.

ARTÍCULO VI OBTENCIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL ESTADO REQUERIDO

- 1.- Una persona a la que se solicite atestiguar y presentar documentos, registros u objetos en el Estado requerido deberá ser obligada, de ser necesario, a comparecer y testificar y a presentar dichos documentos, registros u objetos, de conformidad con la ley del Estado requerido.
- 2.- El derecho a participar en los procesos en el Estado requerido deberá incluir el derecho de cualquier funcionario del Estado requirente y a otras personas especificadas en la petición que estén presentes a plantear preguntas. Deberá

permitirse a las personas presentes en la ejecución de una petición, llevar un registro al pie de la letra de los procesos pudiendo usar medios técnicos para efectuarlo.

ARTÍCULO VII PRESENCIA DE PERSONAS EN LA EJECUCIÓN DE LA PETICIÓN

En la medida que no se encuentre prohibido por la ley del Estado requerido, deberá permitirse a las personas especificadas en la petición estar presentes en la ejecución de la misma.

ARTÍCULO VIII SUMINISTRO DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES U OBJETOS

- 1.- El Estado requerido deberá proporcionar copias de información, documentos y registros de los ministerios y organismos del Gobierno, que se encuentren públicamente disponibles.
- 2.- El Estado requerido podrá proporcionar cualquier información, documentos, registros y objetos que se encuentren en posesión de un ministerio u organismo del Gobierno, pero que no se encuentren públicamente disponibles, en la misma medida y bajo las mismas condiciones en las que estarían disponibles para su propia ejecución de la ley y sus autoridades judiciales.
- 3.- El Estado requerido podrá proporcionar copias auténticas certificadas de documentos o registros, a menos que el Estado requirente solicite expresamente los originales.
- 4.- Los documentos originales, registros u objetos proporcionados al Estado requirente deberán ser devueltos al Estado requerido a la brevedad posible, previa solicitud.
- 5.- En tanto no esté prohibido por la ley del Estado requerido, los documentos, registros u objetos deberán ser proporcionados en un formato o estar acompañados por la certificación especificada por el Estado requirente a fin de hacerlos admisibles de acuerdo a la ley del Estado requirente.

**ARTÍCULO IX
COMUNICACIONES SOBRE CONDENAS**

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo VII, el Estado requerido deberá de acuerdo a su ley, previa solicitud, suministrar los antecedentes penales de una persona.

**ARTÍCULO X
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES**

- 1.- El Estado requerido, atendiendo a su propia legislación, y a petición del Estado requirente, ejecutará las peticiones relativas a medidas cautelares sobre bienes.
- 2.- La autoridad competente que haya ejecutado una petición relativa a medidas cautelares deberá proporcionar la información que solicite el Estado requirente, y lo que pudiere resultar pertinente, sin limitarse a la identidad, condición, integridad y continuidad de posesión de documentos, registros u objetos afectados, así como las circunstancias de la medida cautelar.

**ARTÍCULO XI
GANANCIAS DEL DELITO**

- 1.- El Estado requerido deberá, previa solicitud, esforzarse por averiguar si las ganancias de un delito se encuentran localizadas dentro de su jurisdicción y deberá notificar al Estado requirente los resultados de sus averiguaciones.
- 2.- En caso de encontrarse, de conformidad con el párrafo 1 de este artículo, supuestas ganancias de un delito, el Estado requerido deberá adoptar todas las medidas que le permita su ley para inmovilizar y confiscar tales ganancias.
- 3.- Las ganancias confiscadas de conformidad con el presente Tratado deberán ser otorgadas al Estado requerido, a menos que se acuerde lo contrario en convenio aparte.

ARTÍCULO XII RESTITUCIÓN Y COBRO DE MULTAS

El Estado requerido deberá, en la medida en que su ley lo permita, brindar asistencia en lo concerniente a la restitución a las víctimas del delito y el cobro de las multas impuestas como sentencia en un enjuiciamiento penal.

ARTÍCULO XIII NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

- 1.- El Estado requerido procederá a notificar cualquier documento, en especial los judiciales, que le fueran enviados para ese fin por el Estado requirente.
- 2.- Esta notificación podrá efectuarse mediante la entrega personal al destinatario del documento. El Estado requerido deberá, previa solicitud, notificar de acuerdo a su legislación o en la forma especificada en la petición, siempre y cuando no esté prohibida por su ley.
- 3.- El Estado requerido deberá devolver oportunamente una prueba de la notificación en la forma solicitada por el Estado requirente. Si no hubiera podido efectuarse la notificación, el Estado requerido dará a conocer inmediatamente el motivo al Estado requirente.
- 4.- El Estado requirente deberá transmitir la solicitud que pide la notificación de una orden de comparecencia de una persona que se encuentra en el Estado requerido, la que debe llegarle en un tiempo razonable antes de la fecha fijada para dicho acto.

ARTÍCULO XIV
COMPARECENCIA DE TESTIGOS O DE PERITOS EN EL ESTADO
REQUIRENTE

- 1.- Si el Estado requirente considera la presencia de una persona para asistir en una investigación o para estar presente en calidad de testigo o perito, así lo indicará en su solicitud.
- 2.- El Estado requerido exhortará a comparecer al destinatario. El Estado requerido deberá comunicar de inmediato al Estado requirente la respuesta del destinatario.
- 3.- El Estado requirente deberá asumir los costos de honorarios, gastos de viaje y estadía de las personas que asisten en una investigación o que comparezcan como testigo o perito respecto de la petición.

ARTÍCULO XV
LA NO COMPARECENCIA

El testigo o perito que no haya cumplido con una solicitud que le pedía presentarse en el Estado requirente, no estará sujeto a ninguna sanción ni medida coercitiva, salvo que posteriormente la persona ingrese voluntariamente al territorio de dicho Estado y sea citada.

ARTÍCULO XVI
GARANTÍA RESPECTO A LA COMPARECENCIA

- 1.- La persona presente en el Estado requirente en respuesta a una petición, no deberá ser juzgada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de su libertad personal en dicho Estado por ningún acto u omisión que precediera a la partida de dicha persona del Estado requerido. Tampoco estará obligada a proporcionar pruebas en ningún otro proceso que no sea aquel al que se refiere la petición, salvo lo dispuesto en el artículo XVII inciso 2.

2.- El párrafo I de este artículo dejará de aplicarse si una persona, teniendo libertad de salir del Estado requirente, no sale en un plazo de treinta días después de recibir la notificación oficial de que no se requiere más la comparecencia de la persona o, si habiendo salido, regresó voluntariamente.

3.- Una persona que deja de comparecer en el Estado requirente no deberá estar sujeta a sanción o medida coactiva alguna en el Estado requerido o en el requirente, salvo lo dispuesto en el artículo XV.

ARTÍCULO XVII

ENTREGA TEMPORAL DE PERSONAS CONDENADAS

1.- Previa petición, una persona que cumpla sentencia en el Estado requerido deberá ser temporalmente trasladada al Estado requirente para colaborar con las investigaciones o para testificar, siempre y cuando la persona esté de acuerdo.

2.- En caso de que se solicite que la persona trasladada sea mantenida bajo custodia según las leyes del Estado requerido, el Estado requirente deberá poner a dicha persona bajo custodia y deberá regresar a la persona bajo custodia al término de la ejecución de la petición.

3.- En caso de expirar la sentencia impuesta o en caso de que el Estado requerido comunique al Estado requirente que la persona transferida no deberá seguir siendo mantenida bajo custodia, dicha persona deberá ser puesta en libertad y ser tratada como una persona presente en el Estado requirente, conforme a una petición que busca la comparecencia de dicha persona.

**TÍTULO III
PROCEDIMIENTO**

**ARTÍCULO XVIII
AUTORIDAD CENTRAL**

1.- Para los efectos del presente Tratado, la Autoridad Central es, respecto de la República del Perú, el Ministerio Público, y del Reino de España, es el Ministerio de Justicia -Dirección General de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional.

2.- Las Autoridades Centrales deberán transmitir y recibir las peticiones de asistencia judicial y las respuestas según este Tratado.

3.- Las Autoridades Centrales de los dos Estados establecerán comunicación directa entre ellas.

**ARTÍCULO XIX
CONFIDENCIALIDAD**

1.- El Estado requerido podrá solicitar, luego de consultas con el Estado requirente, que la información o pruebas proporcionadas o la fuente de dicha información o pruebas mantengan carácter confidencial o sean reveladas o empleadas únicamente sujetas a los términos y condiciones que éste pudiera especificar.

2.- El Estado requerido deberá mantener la confidencialidad de una petición, su contenido, los documentos comprobatorios y cualquier acción tomada de acuerdo a la petición, excepto en la medida en que sea necesario para ejecutarlo. Si la petición no pudiese ejecutarse sin contravenir la exigencia de confidencialidad, el Estado requerido informará de ello al Estado requirente antes de llevar a efecto la petición y este último determinará si ésta deba ejecutarse de todas maneras.

ARTÍCULO XX
CONTENIDO DE LA PETICIÓN

- 1.- En todos los casos, las peticiones de asistencia deberán indicar:
 - a. *la autoridad competente que conduce la investigación o los procesos a los cuales se refiere la petición;*
 - b. *la naturaleza de la investigación o procesos, incluyendo un resumen de los hechos y una copia de las leyes aplicables;*
 - c. *el propósito de la petición y la naturaleza de la asistencia buscada;*
 - d. *el grado de confidencialidad requerido y las razones del mismo; y*
 - e. *cualquier límite de tiempo en el cual pueda ser ejecutada la petición.*

- 2.- En los siguientes casos las peticiones de asistencia deberán incluir:
 - a. *en el caso de peticiones para el acopio de pruebas, allanamiento e incautación, o ubicación, inmovilización o confiscación de ganancias de delito, una declaración que indique el fundamento para creer que las pruebas o ganancias podrían encontrarse en el Estado requerido;*
 - b. *en el caso de peticiones para recibir pruebas de una persona, una indicación de si se requiere o no una declaración bajo juramento y una descripción del contenido de las pruebas o declaraciones buscadas;*
 - c. *en el caso de préstamo de documentos de prueba, la ubicación actual de los documentos de prueba en el Estado requerido y una indicación de la persona o clase de personas que tendrán la custodia de los documentos de prueba en el Estado requirente, el lugar al que el documento de prueba ha de ser trasladado, las pruebas que han de llevarse a cabo y la fecha en la que el documento de prueba ha de ser devuelto;*

- d. en el caso de disposición de personas detenidas, una indicación de la persona o clase de personas que tendrán custodia durante el traslado, el lugar al que la persona detenida ha de ser trasladada y la fecha de regreso de dicha persona.
- 3.- De ser necesario y cuando sea posible las peticiones de asistencia deberán incluir:
- a. la identidad, nacionalidad y ubicación de la persona o personas que son objeto de la investigación o los procesos;
 - b. detalles de cualquier proceso o requisito particular que el Estado requirente desea que se siga y las razones para ello.
- 4.- Si el Estado requerido considera que la información no es suficiente para permitir que se ejecute la petición, éste puede solicitar información adicional.
- 5.- Una petición deberá efectuarse por escrito. En circunstancias urgentes, una petición podrá efectuarse oralmente pero deberá ser confirmado después por escrito, prontamente.

ARTÍCULO XXI

EJECUCIÓN DE LA PETICIÓN

- 1.- Si la petición se ajusta a las disposiciones del presente Tratado, la Autoridad Central del Estado requerido lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Competente.
- 2.- Si la petición no se ajusta a las disposiciones del presente Tratado, la Autoridad Central del Estado requerido lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central del Estado requirente.

ARTÍCULO XXII
DISPENSA DE LEGALIZACIÓN Y AUTENTICACIÓN

Los documentos, expedientes o elementos de prueba transmitidos o recibidos por las Autoridades Centrales, en aplicación del presente Tratado, estarán exentos de todas las formalidades de legalización y autenticación; excepto lo estipulado en el artículo VIII.

ARTÍCULO XXIII
GASTOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA PETICIÓN

- 1.- El Estado requerido deberá asumir el costo de la ejecución de la petición de asistencia, exceptuando los siguientes gastos que deberán ser asumidos por el Estado requirente:
 - a. los gastos asociados con el transporte de cualquier persona hacia o desde el territorio del Estado requerido a solicitud del Estado requirente y cualquier gasto a pagar a dicha persona mientras se encuentre en el *Estado requirente o requerido de acuerdo a una petición según los artículos VII, XIV o XVII del presente Tratado*;
 - b. los gastos y honorarios de expertos en el Estado requerido o en el Estado requirente; y
 - c. los gastos de traducción, interpretación y transcripción.
- 2.- Si se considerara que la ejecución de la petición fuera a requerir gastos de naturaleza extraordinaria, las Partes contratantes deberán consultarse a fin de determinar los términos y condiciones bajo las cuales podrá brindarse la asistencia solicitada.

**TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES**

**ARTÍCULO XXIV
OTRO TIPO DE ASISTENCIA**

El presente Tratado no deberá derogar las obligaciones que subsistan entre las Partes Contratantes, ya sea de conformidad con otros tratados, convenios u otros, ni impedir a las Partes contratantes brindarse o continuar brindándose asistencia mutua de conformidad con otros tratados, convenios u otros.

**ARTÍCULO XXV
CONSULTAS**

Las Partes contratantes deberán consultarse oportunamente a solicitud de cualquiera de ellas, en relación a la interpretación y aplicación del presente Tratado.

**ARTÍCULO XXVI
ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA**

- 1.- El presente Tratado deberá entrar en vigor en la fecha en que las Partes contratantes se hayan notificado mutuamente que han cumplido con sus exigencias legales.
- 2.- El presente Tratado deberá aplicarse a cualquier petición presentado después de su entrada en vigor aún cuando los actos u omisiones del caso hubieran ocurrido antes de dicha fecha.
- 3.- Cualquiera de las Partes contratantes podrá denunciar el presente Tratado. La denuncia deberá hacerse efectiva un año después de la fecha en la que ésta fuera notificada a la otra Parte contratante.

En fe de los cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Tratado.

Hecho en Madrid, el día 8 del mes de noviembre de dos mil, por duplicado, en idioma Español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

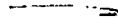
POR EL REINO DE ESPAÑA

A.R.



Josep Piqué i Camps

POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ



Fernando de Trazegnies Granda

[TRANSLATION — TRADUCTION]

TREATY ON JUDICIAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN
THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC OF PERU

The Kingdom of Spain and the Republic of Peru, wishing to improve mutual judicial assistance in criminal matters and to cooperate more effectively in the investigation and prosecution of offences, including the trial and punishment thereof, have agreed as follows:

TITLE I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Obligation to provide mutual judicial assistance

1. The Contracting Parties shall, in accordance with this Treaty, provide each other with the broadest possible judicial assistance in criminal matters.
 2. Mutual judicial assistance means any assistance granted by the requested State with regard to investigations and legal proceedings relating to criminal matters conducted in the requesting State.
 3. Criminal matters means investigations or legal proceedings relating to any offence regarded as such in criminal law.
 4. Criminal matters include investigations and legal proceedings relating to criminal infringements of laws concerning taxes, tariffs or customs duties.
 5. Judicial assistance shall include, in particular:
 - (a) Location and identification of persons, domicile and other material elements;
 - (b) Gathering of evidence and obtaining of statements;
 - (c) Authorization of the presence of persons from the requesting State in the execution of requests;
 - (d) Provision of documents, including bank documents, files and any other evidentiary items;
 - (e) Provision of information;
 - (f) Handing over of property, including the temporary handing over of evidentiary items;
 - (g) Precautionary measures in respect of property;
 - (h) Measures to locate, freeze and confiscate the proceeds of crime;
 - (i) Service of documents;
 - (j) Facilitating the appearance of witnesses or the assistance of individuals in investigations;
 - (k) Making detainees available to give testimony or to collaborate in investigations;
- and

(l) Provision of any other form of assistance in accordance with the purposes of this Treaty.

Article II. Applicable law

1. Requests for assistance shall be executed in a timely manner in accordance with the law of the requested State and, unless it is prohibited by that law, in the manner specified by the requesting State.

2. The requested State shall, if requested, inform the requesting State as to the date and place of execution of the request for assistance.

3. The requested State shall not refuse to execute a request on the grounds of client confidentiality.

Article III. Grounds for refusal or deferral of judicial assistance

1. Judicial assistance may be refused if:

(a) The requested State believes that the execution of the request might prejudice its sovereignty, security, public order or other essential interests;

(b) The request refers to offences which are regarded by the requested State as political or exclusively military offences. Terrorism shall not be regarded as a political offence.

2. The requested State may defer the provision of judicial assistance if the execution of the request might interfere with criminal proceedings under way in its territory at any stage, investigation or trial.

3. The requested State shall:

(a) Inform the requesting State in good time of its decision not to comply, in full or in part, with a request for assistance or postpone the execution, and explain the reasons for that decision;

(b) Before refusing or deferring judicial assistance, ascertain whether the assistance could be provided under the conditions which it deems necessary. If those conditions are accepted, they shall be respected by the requesting State.

TITLE II. OBTAINING OF EVIDENTIARY ITEMS

Article IV. Restricted use

The requesting State shall not divulge or use the information or evidence provided for purposes other than those specified in the request, without the prior consent of the competent authority of the requested State.

Article V. Location and identification of persons and items

The competent authorities of the requested State shall make every effort to ascertain the location of and identify the persons and items specified in the request.

Article VI. Obtaining of evidence in the requested State

1. A person who is requested to testify and submit documents, records or items in the requested State shall be obliged, if necessary, to appear and testify and to submit the said documents, records or items in accordance with the law of the requested State.

2. The right to participate in the proceedings in the requested State shall include the right of any official of the requesting State and other persons specified in the request to be present to ask questions. Persons who are present at the execution of a request, shall be permitted to make a verbatim record of the proceedings and to use technical means for that purpose.

Article VII. Presence of persons at the execution of a request

Persons specified in the request shall be allowed to be present at the execution thereof insofar as this is not prohibited by the law of the requested State.

Article VIII. Provision of documents, dossiers and items

1. The requested State shall provide copies of information, documents and records of government ministries and agencies which are open to public access.

2. The requested State may provide any information, documents, records and items which are in the possession of a government ministry or agency but which are not open to public access to the extent and under the same conditions as those which would be available for its own law enforcement and judicial authorities.

3. The requested State may provide authentic certified copies of documents or records unless the requesting State explicitly requests the originals.

4. The original documents, records and items provided to the requesting State must be returned to the requested State as soon as possible when requested.

5. Insofar as it is not prohibited by the law of the requested State, the documents, records and items must be provided in a format or be certified in a manner specified by the requesting State so that they are admissible in accordance with the law of the requesting State.

Article IX. Communications regarding sentences

Without prejudice to the provisions of article VII, the requested State shall, in accordance with its law and on request, provide the criminal record of a person.

Article X. Precautionary measures relating to property

1. The requested State, taking into account its own legislation and at the request of the requesting State, shall execute requests relating to precautionary measures relating to property.

2. The competent authority which has executed a request relating to precautionary measures, shall provide the information requested by the requesting State and any information which might prove relevant, not only concerning the identity, situation, integrity and continued possession of documents, records or items involved, but also the circumstances of the precautionary measure.

Article XI. Proceeds of crime

1. The requested State shall, if so requested, endeavour to ascertain whether the proceeds of a crime are located within its jurisdiction and shall notify the requesting State of the outcome of its inquiries.

2. In the event that, in accordance with paragraph 1 of this article, suspected proceeds of a crime are found, the requested State shall take all measures permitted under its law to freeze and confiscate such proceeds.

3. The proceeds confiscated in accordance with this Treaty shall be awarded to the requested State unless otherwise agreed in a separate agreement.

Article XII. Restitution and collection of fines

The requested State shall, insofar as its law permits, afford assistance in matters relating to restitution to the victims of the crime and the collection of fines imposed as a sentence in criminal proceedings.

Article XIII. Service of documents

1. The requested State shall proceed to serve any document, in particular judicial documents, sent to it for that purpose by the requesting State.

2. Service may be effected by delivery of the document to the person named therein. The requested State shall, if requested, serve it in accordance with its legislation or in the manner specified in the request, provided that that is not prohibited by its law.

3. The requested State shall in good time return proof of service in the manner requested by the requesting State. If service could not be effected, the requested State shall immediately inform the requesting State of the reason therefor.

4. The requesting State shall transmit a request asking for a summons to be served on a person who is in the requested State reasonably far in advance of the date scheduled for that person's appearance.

Article XIV. Appearance of witnesses or experts in the requesting State

1. If the requesting State requires the presence of a person to assist in an investigation or to be present as a witness or an expert, it shall so indicate in its request.

2. The requested State shall urge the person named in the request to appear. The requested State shall immediately communicate that person's reply to the requesting State.

3. The requesting State shall assume the costs of fees, travel expenses and subsistence allowances of persons who assist in an investigation or who appear as witnesses or experts in response to a request.

Article XV. Non-appearance

A witness or expert who does not comply with a request asking him to appear in the requesting State shall not be subjected to any penalty or coercive measure unless that person subsequently returns voluntarily to the territory of that State and is summoned.

Article XVI. Guarantee concerning appearance

1. A person who is in the requesting State in response to a request shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his personal liberty in that State for any act or omission that preceded his or her departure from the requested State. He or she shall also not be obliged to provide evidence in any other proceedings other than those referred to in the request, except as provided for in article XVII, paragraph 2.

2. Paragraph 1 of this article shall cease to apply if a person who is free to leave the requesting State does not do so within thirty days of receiving official notification that his or her appearance is no longer required or if that person, having left the requesting State, returns voluntarily.

3. A person who has ceased to appear in the requesting State shall not be subjected to any penalty or coercive measure in the requested State or in the requesting State, except as specified in article XV.

Article XVII. Temporary transfer of convicted persons

1. On request, a person who has completed a sentence in the requested State shall be temporarily transferred to the requesting State to cooperate in an investigation or to testify, provided that the person concerned agrees.

2. If it is requested that the person transferred should be held in custody according to the law of the requested State, the requesting State shall place that person in custody and return him or her in custody when the request has been executed.

3. If the sentence imposed has expired or if the requested State advises the requesting State that the person transferred should no longer be held in custody, that person shall be released and be treated as a person present in the requesting State in accordance with a request for his or her appearance.

TITLE III. PROCEDURE

Article XVIII. Central Authority

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authority shall be, for the Republic of Peru, the Office of the Attorney-General, and, for the Kingdom of Spain, the Ministry of Justice - Department of Legislative Policy and International Judicial Cooperation.
2. The Central Authorities shall transmit and receive requests for judicial assistance and replies in accordance with this Treaty.
3. The Central Authorities of the two States shall establish direct communication between them.

Article XIX. Confidentiality

1. The requested State may, after consultation with the requesting State, request that the information or evidence provided or the source of such information or evidence should remain confidential or be revealed or used solely subject to the terms and conditions which the latter State may specify.
2. The requested State shall maintain the confidentiality of a request, its content, the documents submitted in evidence and any action taken in accordance with the request, except insofar as may be necessary to execute it. If the request cannot be executed without contravening the requirement of confidentiality, the requested State shall inform the requesting State accordingly prior to the execution of the request and the latter State shall determine whether it shall be executed anyway.

Article XX. Content of the request

- I. In every case, requests for assistance shall indicate:
 - (a) The name of the competent authority which is conducting the investigation or the proceedings to which the request refers;
 - (b) The nature of the investigation or proceedings, including a summary of the facts and a copy of the applicable laws;
 - (c) The purpose of the request and the nature of the assistance sought;
 - (d) The degree of confidentiality requested and the reasons therefor; and
 - (e) Any time limit for the execution of the request.
2. In the following cases, requests for assistance shall include:
 - (a) In the case of requests for the collection of evidence, the search of premises and the seizure of property or the location, freezing or confiscation of the proceeds of crime, a statement indicating the grounds for believing that the evidence or proceeds might be found in the requested State;
 - (b) In the case of requests for the receipt of evidence from a person, an indication of whether or not a statement under oath is required and a description of the content of the evidence or statements sought;

(c) In the case of the loan of evidentiary documents, the actual location of the evidentiary document in the requested State and an indication of the person or class of persons who will have custody of the evidentiary document in the requesting State, the place where the evidentiary document is to be transmitted, the evidence which is to be obtained and the date on which the evidentiary document is to be returned;

(d) If a detained person is to be made available, an indication of the person or class of persons who will have custody during the transfer, the place to which the detained person is to be transferred and the date of the return of that person.

3. If necessary and whenever possible, requests for assistance shall include:

(a) The identity, nationality and location of the person or persons who are the subject of an investigation or proceedings;

(b) Details of any proceedings or specific requirement which the requesting State may wish to have followed up and the reasons therefor.

4. If the requested State considers that the information is not sufficient to enable it to execute the request, it may request additional information.

5. A request shall be made in writing. In urgent circumstances, a request may be made orally, but it must subsequently be confirmed promptly in writing.

Article XXI. Execution of the request

1. If the request is in accordance with the provisions of this Treaty, the Central Authority of the requested State shall immediately inform the competent authority.

2. If the request is not in accordance with the provisions of this Treaty, the Central Authority of the requested State shall immediately inform the Central Authority of the requesting State.

Article XXII. Exemption from authentication

Documents, files and evidentiary items transmitted or received by the Central Authorities in accordance with this Treaty shall be exempt from all authentication formalities, except as stipulated in article VIII.

Article XXIII. Expenses incurred in the execution of a request

1. The requested State shall assume the costs of the execution of a request for assistance, with the exception of the following costs which shall be assumed by the requesting State:

(a) The costs associated with the transport of any person to or from the territory of the requested State at the request of the requesting State and any expenses to be paid to that person while in the requesting or requested State in accordance with a request under articles VII, XIV or XVII of this Treaty;

(b) The expenses and fees of experts in the requested State or in the requesting State; and

(c) The costs of translation, interpretation and transcription.

2. If it is considered that the execution of a request would involve extraordinary expenses, the Contracting Parties shall consult each other in order to determine the terms and conditions under which the assistance requested could be provided.

TITLE IV. FINAL PROVISIONS

Article XXIV. Other types of assistance

This Treaty shall not derogate from the obligations which exist between the Contracting Parties in conformity with other treaties, agreements and other instruments, nor prevent the Contracting Parties from providing or continuing to provide mutual assistance in accordance with other treaties, agreements and other instruments.

Article XXV. Consultations

The Contracting Parties shall consult each other in a timely manner at the request of either Party concerning the interpretation and implementation of this Treaty.

Article XXVI. Entry into force and denunciation

1. This Treaty shall enter into force on the date on which the Contracting Parties notify each other that they have completed the legal formalities.

2. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force even when the acts or omissions of the case occurred prior to that date.

3. Either of the Contracting Parties may denounce this Treaty. The denunciation shall take effect one year after the date on which the other Contracting Party is notified thereof.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done at Madrid, on 8 November 2000, in duplicate in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:

JOSEP PIQUÉ I CAMPS
ad referendum

For the Republic of Peru:

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA

[TRANSLATION — TRADUCTION]

ACCORD D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE
ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

Le Royaume d'Espagne et la République du Pérou, désireux d'améliorer l'entraide judiciaire en matière pénale et de coopérer plus efficacement aux enquêtes, aux instructions et aux poursuites pénales, y compris au jugement et à la sanction des infractions, conviennent comme suit :

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Obligation d'accorder l'entraide judiciaire

1. Les Parties contractantes se prêtent la plus large entraide judiciaire en matière pénale, en conformité avec le présent Traité.

2. " Entraide judiciaire " s'entend de toute aide accordée par l'État requis à une enquête, une instruction ou une poursuite pénale menée dans l'État requérant.

3. " Matière pénale " s'entend de toute enquête, instruction ou poursuite en rapport avec une infraction à loi pénale.

4. Les " affaires pénales " comprennent les enquêtes, instructions ou poursuites en rapport avec les infractions de caractère pénal à une loi de nature fiscale ou douanière.

5. L'entraide judiciaire comprend en particulier :

a) La recherche et l'identification de personnes, de leur domicile et d'autres éléments matériels;

b) L'obtention d'éléments de preuve et de dépositions et déclarations;

c) L'autorisation donnée à des personnes de l'État requérant d'assister à l'exécution des requêtes;

d) La remise de pièces, actes, documents, y compris documents bancaires, écritures et autres éléments de preuves;

e) La communication de renseignements;

f) La remise de biens, notamment la remise temporaire d'objets de preuve;

g) Les mesures conservatoires concernant des biens;

h) L'adoption de mesures visant à rechercher, bloquer et confisquer les gains résultant d'une infraction;

i) La signification de pièces;

j) L'appui à la comparution de témoins ou l'aide aux enquêteurs;

k) La comparution de personnes détenues pour rendre témoignage ou aider aux enquêtes ou instructions; et

l) Toute autre aide conforme à l'objet du présent Traité.

Article II - Droit applicable

1. Les requêtes d'entraide sont exécutées en temps voulu et en conformité avec la loi de l'État requis et, sauf disposition contraire de ladite loi, dans la forme spécifiée par l'État requérant.

2. Sur demande, l'État requis informe l'État requérant de la date et du lieu prévus pour l'exécution de la requête d'entraide.

3. L'État requis ne peut rejeter une requête en se fondant sur le secret bancaire.

Article III - Motifs de refus ou d'ajournement de l'entraide

1. L'entraide peut être refusée si :

a) L'État requis estime que l'exécution de la requête pourrait attenter à la souveraineté, à la sûreté, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays;

b) La requête se réfère à des infractions que l'État requérant considère comme des crimes politiques ou exclusivement militaires. Le délit de terrorisme n'est pas considéré crime politique.

2. L'État requis peut ajourner l'entraide judiciaire si l'exécution de la requête risque de gêner l'enquête, l'instruction, le jugement ou toute autre étape d'une affaire pénale en instance dans ledit État.

3. L'État requis :

a) Informe en temps voulu l'État requérant de la décision de l'État requis soit de ne pas faire droit en tout ou en partie à une requête d'entraide soit d'en ajourner l'exécution, en exposant les motifs de cette décision;

b) Avant de refuser ou d'ajourner l'entraide judiciaire, détermine si celle-ci peut être accordée dans des conditions qu'il juge appropriées. En pareil cas, lesdites conditions, si elles sont acceptées, doivent être respectées dans l'État requérant.

TITRE II - OBTENTION D'ÉLÉMENTS DE PREUVE

Article IV - Exploitation restreinte

L'État requérant ne doit ni divulguer ni exploiter les renseignements ou les éléments de preuves fournis à aucune fin autre que celles qui sont invoquées dans la requête, sauf consentement préalable de l'autorité compétente de l'État requis.

Article V - Recherche et identification de personnes et d'objets

Les autorités compétentes de l'État requis doivent déployer tous les efforts possibles pour rechercher et identifier les personnes et les objets mentionnés dans la requête.

Article VI - Obtention d'éléments de preuve dans l'État requis

1. Toute personne qui est requise de déposer et de présenter des pièces, documents, actes, registres ou objets dans l'État requis est contrainte, si besoin, à comparaître pour témoigner et à présenter les pièces, documents, actes, registres ou objets en question, en conformité avec la loi de l'État requis.

2. Toute personne présente qui est un fonctionnaire de l'État requérant ou qui est désignée dans la requête a le droit de poser des questions en tant que participant aux procédures dans l'État requis. Toute personne présente lors de l'exécution d'une requête est autorisée à dresser un compte rendu littéral de la procédure en employant au besoin des moyens techniques.

Article VII - Présence à l'exécution de la requête

Sauf disposition contraire dans les loi de l'État requis, les personnes désignées à cette fin dans la requête sont autorisées à assister à son exécution.

Article VIII - Remise de pièces, d'actes, de documents ou d'objets

1. L'État requis communique copie des informations, pièces, actes, documents et registres des ministères et organismes officiels, dans la mesure où ces écritures sont à la disposition du public.

2. L'État requis peut remettre toutes informations, pièces et actes, ainsi que tous registres et objets qui sont en possession d'un ministère ou d'un organisme public mais qui ne sont pas à la disposition du public, dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu'il les emploierait lui même pour l'exécution de ses lois ou qu'il les remettrait à ses propres autorités judiciaires.

3. L'État requis peut remettre des copies certifiées conformes des pièces, actes, documents ou registres, à moins que l'État requérant ne demande expressément communication des originaux.

4. Les pièces, actes et documents originaux, les registres ou les objets remis à l'État requérant doivent, à la demande préalable de l'État requis, être restitués à celui ci dans les plus brefs délais.

5. Sauf disposition contraire dans la loi de l'État requis, les pièces, actes, documents, registres ou objets doivent être remis sous la forme demandée ou être accompagnés de la certification spécifiée par l'État requérant pour assurer leur recevabilité aux termes de la loi de l'État requérant.

Article IX - Casier judiciaire

Sans préjudice des dispositions de l'article VII et sans préjudice des dispositions légales de l'État requis, celui ci communique à l'État requérant le casier judiciaire de toute personne visée par une requête à cette fin.

Article X - Mesures conservatoires relatives à des biens

1. L'État requis exécute, en conformité avec ses lois, les requêtes présentées par l'État requérant aux fins de l'adoption de mesures conservatoires relatives à des biens.

2. L'autorité compétente qui a exécuté une requête relative à des mesures conservatoires remet à l'État requérant les renseignements demandés par celui-ci, ainsi que tous éléments pertinents qui concernent en particulier mais non exclusivement l'identité, l'état, l'intégrité et la continuité de la possession des pièces, actes, documents, registres ou objets concernés, en précisant les circonstances dans lesquelles les mesures conservatoires ont été prises.

Article XI - Produit du délit

1. L'État requis s'efforce, à la demande de l'État requérant, de vérifier si le produit d'un délit se trouve dans son ressort géographique et il notifie les résultats de ses recherches à l'État requérant.

2. Si les recherches menées en conformité avec le paragraphe 1 du présent article permettent de découvrir le produit d'un délit, l'État requis adopte toutes les mesures auxquelles l'habilite ses lois afin de bloquer et confisquer ledit produit.

3. Les produits confisqués en conformité avec le présent Traité sont dévolus à l'État requis, sauf s'il en est autrement convenu par ailleurs.

Article XII - Restitution et amendes

Dans la mesure où ses lois l'y habilite, l'État requis prête assistance pour ce qui concerne la restitution aux victimes d'infractions et le recouvrement des amendes imposées par décision de justice pénale.

Article XIII - Significations

1. L'État requis procède à la signification de tous actes, en particulier les actes judiciaires, qui lui sont transmis à cette fin par l'État requérant.

2. Un acte est réputé signifié dès lors qu'il est remis en mains propres à son destinataire. L'État requis notifie l'acte soit en conformité avec ses règles de procédure soit, si ses lois le permettent, dans la forme prescrite dans la requête.

3. L'État requis atteste en temps voulu de la signification de l'acte en employant les formes prescrites par l'État requérant. S'il n'est pas possible de signifier l'acte, l'État requis informe immédiatement l'État requérant du motif de l'inexécution.

4. L'État requérant transmet la requête aux fins de la signification d'une citation à comparaître, adressée à une personne qui se trouve dans l'État requis, en temps voulu pour que ladite citation puisse être notifiée à son destinataire avec un préavis raisonnable.

Article XIV - Comparution de témoins ou d'experts dans l'État requérant

1. Si l'État requérant souhaite qu'une personne assiste en qualité de témoin ou d'expert à une enquête ou instruction, il doit le mentionner dans la requête.
2. L'État requis invite le destinataire à comparaître. L'État requis porte immédiatement la réponse du destinataire à la connaissance de l'État requérant.
3. L'État requérant prend en charge le montant des honoraires et des frais de déplacement et de séjour des personnes qui aident à une enquête ou instruction ou qui comparaisent en qualité de témoins ou d'experts en rapport avec la requête.

Article XV - Non comparution

Le témoin ou l'expert qui ne répond pas à une requête l'invitant à comparaître dans l'État requérant n'est passible d'aucune peine et ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte sauf si, par la suite, il se rend volontairement dans le territoire dudit État requérant et y est cité à comparaître.

Article XVI - Sauf conduit

1. Celui qui comparaît dans le for de l'État requérant en réponse à une requête ne peut être jugé ou arrêté, ni faire l'objet d'aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans ledit État, pour aucun acte ou omission antérieur à son départ du territoire de l'État requis, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article XVII.
2. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s'appliquer si l'individu, ayant la faculté de quitter le for de l'État requérant, n'en est pas sorti à l'expiration d'un délai de 30 jours après avoir reçu une notification officielle l'informant que sa comparution n'est plus nécessaire, ou s'il revient de son propre gré dans le territoire de l'État requérant après l'avoir quitté.
3. Celui qui manque à comparaître dans le for de l'État requérant n'est passible d'aucune peine et ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte dans l'État requis ou dans l'État requérant, sans préjudice des dispositions de l'article XV.

Article XVII - Transfèrement temporaire de condamnés

1. À la demande de l'État requérant, un individu purgeant une peine dans le for de l'État requis peut, s'il y consent, être transféré temporairement dans le for de l'État requérant afin d'aider à une enquête ou instruction ou de rendre témoignage.
2. S'il est demandé que l'individu transféré soit maintenu en détention selon les lois de l'État requis, l'État requérant assure la garde dudit individu et le remet à l'État requis sous bonne escorte à l'expiration de la procédure visée par la requête.
3. Dès que la peine imposée expire ou que l'État requis communique à l'État requérant que l'individu transféré n'est plus astreint à détention, ledit individu doit être remis en liberté et traité comme toute autre personne se trouvant dans le for de l'État requérant en réponse à une requête aux fins de sa comparution.

TITRE III - PROCÉDURE

Article XVIII - Autorité centrale

1. Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est : dans le cas de la République du Pérou, le Ministère public; et, dans le cas du Royaume d'Espagne, la Direction générale de politique législative et d'entraide juridique internationale du Ministère de la Justice.

2. Les Autorités centrales transmettent et reçoivent les requêtes aux fins d'entraide judiciaire et les réponses qui sont visées par le présent Traité.

3. Les Autorités centrales des deux États communiquent directement entre elles.

Article XIX - Confidentialité

1. L'État requis peut demander, après consultations avec l'État requérant, que soit maintenu le caractère confidentiel des renseignements et éléments de preuve communiqués, ainsi que de leurs sources, ou qu'ils soient révélés ou exploités exclusivement selon les conditions spécifiées par l'État requis.

2. L'État requis maintient le caractère confidentiel de toute requête, de son contenu, de ses pièces justificatives, ainsi que de toute autre mesure prise en conformité avec ladite requête, sauf dans la mesure nécessaire à exécution de celle-ci. S'il n'est pas possible d'exécuter la requête sans lever le secret, l'État requis en informe l'État requérant avant de faire droit à la requête et celui-ci décide s'il convient néanmoins de l'exécuter.

Article XX - Contenu de la requête

1. Toute requête aux fins d'entraide judiciaire doit contenir les mentions suivantes :

a) Dénomination de l'autorité compétente chargée de l'enquête ou instruction ou des poursuites qui motivent la requête;

b) Nature de l'enquête ou instruction ou des poursuites, y compris un résumé des faits et copie du texte des lois applicables;

c) Objet de la requête et nature de l'entraide requise;

d) Degré et motifs de la confidentialité requise; et

e) Tout délai dans lequel la requête peut être exécutée.

2. Dans les cas ci-après, la requête doit contenir :

a) S'agissant d'une requête aux fins d'obtention d'éléments de preuve, de perquisition et saisie, ou de recherche, blocage ou confiscation de produits d'infractions : une déclaration précisant les raisons pour lesquelles il y a lieu de croire que lesdits éléments de preuve ou produits pourraient se trouver dans le for de l'État requis;

b) S'agissant d'une requête aux fins de l'auditions de personnes : l'exigence éventuelle de recueillir une déposition ou déclaration sous serment et la description du contenu des preuves testimoniales ou déclarations recherchées;

c) S'agissant du prêt d'éléments de preuves documentaires : l'indication du lieu où se trouvent actuellement les preuves documentaires dans le for de l'État requis et du lieu dans lequel les preuves documentaires doivent être transférées; les preuves recherchées et la date à laquelle les preuves documentaires doivent être restituées;

d) S'agissant de la présentation d'individus détenus : l'indication de la personne ou de la catégorie de personnes qui escorteront le détenu pendant son transfert, du lieu dans lequel celui-ci doit être transféré et de la date à laquelle il sera remis à la garde de l'État requis.

3. Si besoin et dans la mesure du possible, la requête doit aussi contenir les éléments suivants :

a) L'identité, la nationalité et le lieu où se trouvent la ou les personnes faisant l'objet d'enquête, d'instruction ou de poursuites;

b) Description détaillée et motifs de toute procédure ou forme particulière demandée par l'État requérant pour l'exécution de la requête.

4. Lorsque l'État requis estime que les renseignements donnés dans la requête sont insuffisants pour que celle-ci puisse être exécutée, il peut réclamer un complément d'information.

5. La requête doit être présentée par écrit. En cas d'urgence, la requête peut être présentée oralement, sous réserve qu'elle soit promptement confirmée par écrit.

Article XXI - Exécution de la requête

1. Si la requête est conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'État requis en informe immédiatement l'autorité compétente.

2. Si la requête n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'État requis en informe immédiatement l'Autorité centrale de l'État requérant.

Article XXII - Dispense de légalisation et d'authentification

Les pièces, actes, documents ou éléments de preuve transmis ou reçus par les Autorités centrales en application du présent Traité sont dispensés de toutes formalités de légalisation et d'authentification, sans préjudice des dispositions de l'article VIII.

Article XXIII - Frais entraînés par l'exécution de la requête

I. L'État requis prend en charge les frais nécessaires pour faire droit à la demande d'entraide, à l'exception des dépenses suivantes qui incombent à l'État requérant :

a) Les frais afférents au transport de toute personne à destination ou en provenance du territoire de l'État requis, effectué à la demande de l'État requérant, ainsi que toutes les indemnités pour frais exigibles par ladite personne lorsqu'elle se trouve dans le for de l'État requérant au titre d'une requête visée à l'article VII, XIV ou XVII du présent Traité;

b) Les indemnités et honoraires d'experts dans l'État requis ou dans l'État requérant; et

c) Les frais de traduction, d'interprétation et de transcription.

2. Si l'exécution de la requête exige des frais jugés extraordinaires, les Parties contractantes se concertent afin de déterminer les conditions dans lesquelles l'entraide demandée peut être fournie.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article XXIV - Autres formes d'entraide

Le présent Traité ne déroge nullement aux obligations existant entre les Parties contractantes aux termes d'autres traités, conventions, accords ou instruments et n'empêchent pas lesdites Parties contractantes de s'entraider ni de continuer à s'entraider aux termes d'autres traités, conventions, accords ou instruments.

Article XXV - Concertation

Les Parties contractantes se concertent sans délai, à la demande de l'une ou de l'autre d'entre elles, en rapport avec l'interprétation et l'application du présent Traité.

Article XXVI - Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Traité entre en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se notifient réciproquement l'accomplissement des prescriptions légales nécessaires.

2. Le présent Traité s'applique à toute requête présentée dès son entrée en vigueur, que les actes ou omissions allégués se soient produits avant ou après cette date.

3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle elle a été notifiée à l'autre Partie contractante.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, signent le présent Traité.

Fait à Madrid le 8 novembre 2000 en deux exemplaires en espagnol, les deux textes étant également authentiques.

Pour le Royaume d'Espagne, ad referendum :

JOSEP PIQUÉ I CAMPS

Pour la République du Pérou

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA